

ron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. — (Firmados.) — *S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Orizaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Leon Guzman.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Febrero nueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta,* oficial mayor.

COMPETENCIA

Entre los ciudadanos Juez 5º de lo Civil de esta Capital y el de 1ª instancia de Orizava, para conocer del juicio promovido por la Municipalidad de Maltrata contra los herederos de D. Joaquín Pesado, sobre propiedad de un terreno de la Hacienda del Encinal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El Fiscal dice: Que según aparece de las constancias que se tienen á la vista, el día 9 de Junio de 1869 el Síndico de la Municipalidad de Maltrata, Estado de Veracruz, se presentó ante el Juzgado de 1ª instancia de Orizava, demandando al dueño de la hacienda del Encinal, que lo es la testamentaria del Sr. D. Joaquín Pesado, la restitucion de un terreno anexo á ella, y conocido con el nombre de Tlaxomulco: el demandado, representado á su vez por el ciudadano Juan Gutierrez, declinó desde luego la jurisdiccion del Juez de Orizava, alegando: que la testamentaria demandada estaba radicada en México, y los albaceas domiciliados aquí tambien. Esta circuns-

tancia dió origen á la presente controversia de jurisdiccion suscitada entre el referido Juez y el 5º de lo civil de esta capital; la que entablada en la forma legal, ha venido al conocimiento de esta Corte Suprema, para que en uso de sus atribuciones se sirva dirimirla.

El Juzgado 5º de lo Civil de esta capital, funda su jurisdiccion en la ley 32 tit. 2º Partida 3ª y en las doctrinas de varios tratadistas, que enseñan: que el fuero del domicilio es el mas preferente, y que el de la ubicacion de la cosa, solo tiene lugar en el caso de que allí se encuentre el demandado en el momento de ponerle la demanda.

A su vez, el Juzgado de Orizava hace consistir su competencia: 1º en que el Código de procedimientos del Estado, en la fraccion 1ª del artículo 14, tiene determinado que las demandas en que se ejercitan acciones reales sobre bienes inmuebles, correspondan al Juez del lugar en que estos estén situados: 2º En que la Municipalidad de Maltrata ejerce tales acciones contra los herederos de Pesado, por un rancho que se halla situado á inmediaciones del pueblo de Maltrata dentro de los límites que forman el canton en que dicho Juzgado de Orizava ejerce sus atribuciones: 3º Que según el artículo 2,481 del Código de Veracruz, quedaron derogadas todas las leyes y costumbres antiguas, infiriendo de ahí que no deben tener ningun valor las que sean contrarias á lo que dicho Código dispone; y que en consecuencia, por mas respetables que sean los fundamentos en que se apoya su competidor, estos no deben considerarse en el Estado sino como opiniones, pero nunca como preceptos legales.

Como se vé, pues, se vuelve á tocar la cuestion sobre si las leyes locales de un Estado, deben ser obligatorias para los vecinos de otros. Cuestion que esta respectable Sala, con la ilustracion que la caracteriza, ha decidido de una manera enteramente satisfactoria, y cuya resolucion ha venido á importar nada menos la incoluminidad del pacto federal.

Por lo mismo, el suscrito, no tendrá mas que referirse á aquellas resoluciones para concluir su pedimento; pero se permitirá, sin embargo, reproducir aquí algunas razones para la resolución del punto en cuestion.

Como se ha dicho antes, el Juez de Orizava funda su jurisdiccion en el artículo 14 fraccion 1ª del Código de Procedimientos de su Estado. De esa disposicion local deriva todas las otras razones, que como coadyuvantes, aduce en defensa de su autoridad; pero indudablemente, al hacer esta cita, no se fijó seriamente en lo que esa misma ley de Procedimientos dispone en su capítulo 3º al tratar las cuestiones de competencia y recusaciones.

Con efecto, en la seccion 1ª de este capítulo, artículo 462, se clasifican las diversas autoridades, entre las que pueden suscitarse competencia de jurisdiccion.

A este fin, ese artículo se divide en tres fracciones, de las que las dos primeras se ocupan de las competencias que se suscitan entre las autoridades judiciales, políticas ó municipales, que residan dentro del territorio del Estado; mas la fraccion 3ª se refiere á las competencias que se originan: "*Entre las autoridades del Estado de que habla la fraccion 1ª, y la de los otros Estados ó de la Federacion.*" Pues bien, consecuente con esta clasificacion, todos los artículos que siguen hasta el 490, vienen prescribiendo las reglas que hayan de observarse para entablar las competencias á que se refiere el artículo 462 en sus fracciones 1ª y 2ª: mas el artículo 491, dice á la letra: "*Las cuestiones de competencia comprendidas en la fraccion 3ª del artículo citado, (es decir, las que se suscitan con autoridades de diferentes Estados,) deberán seguirse conforme á las leyes generales.*" De manera que, segun esta disposicion, ó lo que es lo mismo segun lo prevenido en esa ley de procedimientos á la que el Juez de Orizava tiene que sujetarse, y hace alarde de hacerlo, no debió sostener esta competencia con arreglo á su ley local, sino sujetarse á lo dispuesto en las leyes que forman nues-

tra Legislacion comun. Segun esta, está universalmente reconocido que el fuero del lugar del domicilio, se ha preferido á todos los demas; que segun los mejores tratadistas de esa misma Legislacion, el fuero del lugar del contrato solo se toma en cuenta, cuando hay la circunstancia muy particular de que allí se encuentra el demandado al tiempo de formular la demanda; y consecuente con esa Legislacion y esas doctrinas, esta Corte Suprema, y todos los Tribunales, despachan diariamente ejecutorias en ese sentido.

Pero aun suponiendo que no existiera esa disposicion terminante de la ley de Procedimientos del Estado de Veracruz, por la que se respeta, como debe ser, la soberanía ó independencia de los otros, tampoco podria decirse que el Juez de Orizava era el competente para conocer en este asunto, solo porque su ley local le concedia jurisdiccion con arreglo al artículo 14 de la misma; porque, como ha tomado en consideracion otra vez esta respetable Corte, las leyes particulares de los Estados no pueden derogar ni modificar las generales de la federacion, ni tampoco, pudiera añadirse, la Legislatura de un Estado tiene facultades para legislar en lo relativo á la autoridad judicial y de otro Estado igualmente soberano ó independiente.

Estudiada concienzudamente á la luz de la verdad y desnudos de toda preocupacion ó de cierto afecto de provincialismo, la Constitucion federal, bien determina en sus diversos artículos referentes á las prerogativas de los Estados, cuáles sean sus atribuciones, y á la vez marca igualmente con bastante precision y claridad, aquellas cosas que les quedan prohibidas; sentando como base ó principio general, esta que podemos llamar regla de Derecho Constitucional: "Los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen interior." (Arts. 40 y 41 de la Constitucion general.) Pues bien, esa regla ó principio contiene á la vez una prerogativa y una limitacion; una proposicion afirmativa que entraña una

negativa; los Estados pueden ejercer su soberanía en todo lo concerniente á su régimen interior; luego no pueden hacerlo en lo relativo á su situación exterior. En lo referente á cada uno, en lo particular, en el seno del mismo Estado, ó como pudiéramos decir para precisar mas la idea, en familia, en lo tocante á sus súbditos, son libres, absolutamente libres; su autonomía está reconocida por la Carta fundamental de la República, y sancionada por ella; mas todos aquellos actos que afectan los intereses de otros Estados, ó los derechos adquiridos por los ciudadanos de estos; todas aquellas disposiciones que tiendan á ejercer una fuerza obligatoria, á imponer un precepto, mas allá del límite territorial del Estado que los ejecuta ó los dicte; en todas estas cosas, ya los Estados tienen, no obstante su soberanía é independencia, coartado el ejercicio de semejante prerrogativa, y la razón es: porque en todo esto ya no se trata de cosas relativas al régimen interior de cada uno de ellos, sino de acciones referentes á las relaciones exteriores de un Estado para con otro, ó de un Estado para con los súbditos ó ciudadanos de los otros; y entonces, las disposiciones, leyes ó reglamentos que expiden en tal sentido, no tienen ninguna fuerza, como dados sin autoridad ninguna.

Así, pues, en tales casos, no se debe buscar para su resolución la disposición local, sino acudir á una ley general que por lo mismo de serlo, es obligatoria para todos; y esto con preferencia aun á las mismas Constituciones y leyes de los Estados; así se explica el final del artículo 126 de la Constitución federal.

Consecuente con los principios expuestos, el artículo 2º de la Constitución del Estado de Veracruz declara solemnemente: que es un Estado libre, soberano é independiente en su administración y Gobierno interior. En consecuencia, con esta declaración, su ley de procedimientos, al tratar de las competencias de jurisdicción, hace en su artículo 491 la notable remarcación de que

las competencias que se susciten entre autoridades de diferentes Estados, se sigan con arreglo á las leyes generales.

Por los fundamentos, pues, en que se apoya este pedimento, el Fiscal concluye con las siguientes proposiciones: 1ª Se declara que el Juzgado de lo Civil de México es el competente para conocer en el juicio que sobre restitución de un terreno, se ha promovido por la Municipalidad de Maltrata á los herederos de D. José Joaquín Pesado.

2ª Remítanse las actuaciones con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, y copia igual al de Orizava para su conocimiento; haciéndose saber, y archívese el Toca.

México, Enero dos de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—Altamirano.

APUNTES

Del informe pronunciado por el Lic. Alfredo Chavero ante la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la competencia entre el Juez de 1ª instancia de la Ciudad de Orizava y el 5º de lo Civil de esta Capital, sobre conocer del juicio promovido por la Municipalidad de Maltrata contra la testamentaria de D. José Joaquín Pesado.

CC. Magistrados:

En nombre de los Albaceas y herederos del Sr. D. José Joaquín Pesado, pido á la Corte que se sirva declarar competente al C. Juez 5º de lo Civil de la Capital, en la contienda de jurisdicción suscitada entre este y el C. Juez de 1ª instancia de la ciudad de Orizava, sobre conocer del juicio promovido por la municipalidad de Maltrata sobre posesión y propiedad del rancho de Tlaxomulco, que forma parte de la hacienda del Encinal, la cual es uno de los

bienes del caudal hereditario de la testamentaria.

Sencillo es el caso y el punto de derecho que tiene que resolverse. El Sr. D. Juan Andrade, síndico de dicha municipalidad, demandó en nueve de Junio de mil ochocientos sesenta y nueve ante el Juzgado de Orizava, al dueño de la hacienda del Encinal, sin expresar quién fuera este dueño, y pidiendo la posesion y propiedad del rancho de Tlaxomulco. Hecha saber la demanda al administrador, quien contestó que la finca era propiedad de la testamentaria del Sr. Pesado, la municipalidad de Maltrata pidió que se exhortara á los albaceas para que fuesen á contestar la demanda. En virtud del exhorto, á petición de las Sras. D^a Carmen y D^a Guadalupe Pesado, que son los albaceas, por auto de 3 de Agosto del mismo año, el C. Juez 5^o de lo Civil inició competencia al de Orizava, por estar radicada la testamentaria ante él, y estar domiciliados en México los referidos albaceas.

Seguiose sustanciando la competencia, hasta que la municipalidad se desistió del emplazamiento hecho á los albaceas; dándola por desistida á su perjuicio el mismo Juzgado de Orizava por auto de 14 de Setiembre de 1869.

Suspendióse por algun tiempo el presente negocio, hasta que en 7 de Mayo 1870, pidió el nuevo representante de la municipalidad que se mandara exhorto al mismo Juzgado 5^o para que citara á los hijos varones del Sr. Pesado, á quienes en la liquidacion respectiva se señalaba como legítima la referida hacienda del Encinal. Con motivo de este exhorto el C. Juez 5^o de lo civil actual, remitió al de Orizava nuevo oficio de competencia conforme á lo mandado en auto de 20 de Julio siguiente, fundándose en que la testamentaria no estaba concluida, pues la misma liquidacion se habia devuelto para reformarla, y que aun cuando estuviera terminada, los herederos varones estaban domiciliados en México, pues solamente uno se hallaba en el Estado de Veracruz.

Admitida la competencia por el C. Juez de Orizava, fundándose en los artículos 14 del Código de procedimientos y 2,481 del Civil del Estado de Veracruz, está á la vista de esta respetable Sala.

Por lo tanto, la cuestion se reduce á decidir qué fuero es preferente, el del lugar en que está situada la hacienda del Encinal, cuya propiedad en parte se persigue por la municipalidad de Maltrata, ó el fuero de México, en donde está radicada la testamentaria á la cual pertenece esa hacienda, y en donde están domiciliados los albaceas y herederos.

Para resolverlo debemos comenzar por fijar la legislacion que rige en las contencias de jurisdiccion. El art. 99 de la Constitucion de 1857 dice: "Corresponde tambien á la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federacion; entre estos y los de los Estados, ó entre los de un Estado y los de otro." De ese artículo se deduce, que puesto que la Suprema Corte debe decidir las competencias suscitadas entre los funcionarios judiciales de dos Estados, cualesquiera que estos sean, es claro que debe resolverlas conforme á las leyes generales, independientemente de las leyes particulares de cada Estado. Este principio tan justo y tan sencillo, tiene en su apoyo una ley terminante dada por el Congreso en 23 de Mayo de 1851, la cual dice: "Mientras se da la ley general que debe arreglar las competencias de jurisdiccion entre los jueces de diversos Estados, territorios y Distrito que componen la federacion, se observarán en las pendientes y en las nuevas que ocurran, las reglas de la legislacion comun, que rigió como general antes de la adopcion del sistema federativo, con las reformas que en ella hayan introducido la Constitucion federal y las leyes del Congreso de la Union." Se vé pues, que mientras no se dé la ley especial sobre esta materia, siguen rigiendo como exclusivas las leyes generales. Esto sucede con mayoría de razon en el Estado de Veracruz, porque

se previene lo siguiente en su Código especial de procedimientos:

"Art. 462. Las cuestiones de competencia pueden suscitarse:

1º Entre autoridades judiciales de igual ó diversa categoría de un mismo municipio, de un mismo partido judicial ó de distintos municipios ó partidos judiciales del Estado.

2º Entre las referidas autoridades del mismo y las municipales ó políticas.

3º Entre las autoridades del Estado de que habla la fracción 1ª y las de los otros Estados ó de la federación."

"Art. 491. Las cuestiones de competencia comprendidas en la tercera fracción del artículo citado, deberán seguirse conforme á las leyes generales." La fracción citada que es la 3ª del artículo 462, se refiere, como se ha visto, á las competencias entre las autoridades del Estado y las de los otros Estados: de manera que si las competencias de cualquiera otro Estado deben decidirse por las leyes generales, con mucha más razón se decidirán aquellas en que se interesan las autoridades del de Veracruz, pues además de todos los fundamentos legales, hay la ley especial del mismo Estado que así lo manda, y que debe ser acatada y obedecida por sus autoridades.

Supuesto el mandato expreso de este artículo 491 del Código de procedimientos de Veracruz, no ha podido el Juez de Orizava apoyar su jurisdicción en el artículo 14 del mismo Código, que declara preferente el fuero *rei setæ*, cuando la acción que se ejercita es real; porque tal artículo es del Código particular del Estado de Veracruz, y por las disposiciones del mismo, art. 491, las competencias de la clase de la presente deben decidirse por las leyes generales, y por lo mismo no es aplicable al caso lo que previene la disposición particular del art. 14.

Por igual razón no puede hacerse valer lo dispuesto en el art. 2,481 del Código civil del mismo Estado; y además porque ese artículo dice que, "quedan derogadas todas las leyes, costumbres y decretos anteriores en las materias que son objeto de

ese Código civil," y no lo es la cuestión de competencias, que es solamente materia de procedimientos.

Por lo tanto, ha sido un absurdo del ciudadano Juez de 1ª instancia de Orizava citar en apoyo de su jurisdicción el art. 2,481 del Código civil que no viene al caso, y el art. 14 del Código de procedimientos, puesto que este se refiere solamente á las cuestiones que pueda haber entre jueces del mismo Estado de Veracruz.

Esta disposición legal ha sido obsequiada constantemente por la presente Corte, que en diversas ejecutorias ha decidido, que la ley particular de un Estado no puede aplicarse en cuestiones de competencia, porque tanto equivaldría á que obligara en el otro Estado que compete.

No puede decirse que la aplicación de leyes generales ataca la soberanía particular de cada Estado, pues las cuestiones de competencia pertenecen á sus relaciones exteriores, y ellos no son soberanos sino en lo *concerniente á su régimen interior* conforme á lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución, la cual es la ley suprema, *á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados*, como expresamente previene el art. 126.

Me parece superfluo ocuparme de la opinión, por fortuna poco común, que sostiene que las relaciones de Estado á Estado deben regirse por el derecho de gentes como si fueran naciones independientes. Bastará observar que el artículo 40 de la Constitución los llama *libres y soberanos en su régimen interior*; pero no independientes, pues al contrario, dice que *están unidos en federación*. Bastará observar igualmente, que las naciones no tienen entre sí superior, y que tan solo se rigen por las leyes de reciprocidad, mientras que los Estados tienen por ley suprema la Constitución, conforme al artículo 126, y por superior para derimir sus competencias y sus controversias á esta Suprema Corte, conforme á los artículos 98 y 99 de la misma Constitución.

Es pues incuestionable que la presente competencia debe decidirse conforme á las leyes generales. Véamos ahora cuáles son las disposiciones de estas.

Tenemos como regla general, que el actor debe seguir el fuero del reo; principio que está expresamente consignado en la ley 32 tít. 2, part. 3ª, y en la 21 tít. 5, lib. 2 de la Recopilacion. Tenemos como segundo principio, que se debe demandar al reo en su domicilio, conforme á lo dispuesto en la ley 4ª, tít. 3º, part. 3ª, que dice á la letra: "Responder non deve el demandado en juyzio ante otro Alcalde, si non ante aquel que es puesto para judgar la tierra, *do el mora cotidianamente.*" El principio de esta ley ha sido aceptado unánimemente por todos nuestros tratadistas; pero me limitaré solamente á citar al Sr. Peña y Peña, quien en su *Práctica Forense mexicana*, en la lec. 11ª, dice: "151. El primero y mas recomendable de todos (*los fueros*) es el del domicilio: 1º porque este es el mas universal, pues tiene lugar en toda clase de causas, ora sean civiles, ora criminales; en toda especie de acciones, reales ó personales; en todo género de cosas, bien sea que estén dentro ó fuera del mismo domicilio; y tambien en todo género de contratos y de delitos. 152. 2º El fuero del domicilio concurre con todos los demas fueros, y no es excluido por alguno. 153. 3º El es el que hace á los ciudadanos propia y rigurosamente súbditos del Juez del mismo domicilio, como no los hacen todos los demas. 154. 4º Es el mas natural de suyo y el mas benéfico é importante al orden y causa pública, porque nada hay mas conforme á la naturaleza del hombre en sociedad, que el ser juzgado por el juez propio del territorio en que vive y en que ejecuta todas sus acciones: así como nada puede haber mas violento y pernicioso, que el sacar á un ciudadano de sus propios hogares para sujetarlo á un juicio en tierras extrañas y distantes; ni hay tampoco cosa que mas pueda trastornar el orden público en el sistema judicial. 155. 5º Por todas es-

tas razones es el mas fuerte, el mas principal y poderoso, y que en lo civil debe preferir á todos los demas."

Nótese que una de las razones es lo gravoso que seria al reo alejarse de su residencia, perjuicio verdaderamente irreparable cuando se le demanda temerariamente, pues nada mas fácil entonces que sacar de su domicilio á una persona á quien se quiera perjudicar, tan solo con demandarla infundadamente en un lugar lejano en que pueda tener algun bien inmueble, por cuya razon el Sr. Peña y Peña, el Sr. Carleval y en general nuestros tratadistas, sostienen como preferente el fuero del domicilio, y solo admiten el de la ubicacion de la cosa cuando el reo se encuentra en ese lugar. Pero en el caso presente, no solamente el reo no se encuentra en el lugar, sino que se entabla contra él una accion ordinaria sobre posesion y propiedad, que se hace desde luego sospechosa, pues en el mismo escrito de demanda á fojas 6 vuelta del cuaderno principal, se dice que hace años que el Sr. D. Joaquin Pesado, en virtud de arreglos celebrados con el Lic. Seoane, representante de la municipalidad, y que ésta desconoce, tiene la posesion de los terrenos que se reclaman. Esta sospecha de injusticia en la demanda confirma como preferente el fuero de domicilio por las razones antes expuestas. Por lo demas, la preferencia de este fuero ha sido declarada por la presente Sala en varias ejecutorias, y especialmente en la de 2 de Marzo de 1870, que se registra en la página 342 del tomo 4º de "*El Derecho*," en la sentencia pronunciada en la competencia promovida por el Juez de 1ª instancia de la ciudad de Durango, en el Estado del mismo nombre, al de igual clase de Sombrerete, en el de Zacatecas.

Queda, pues, demostrado que en la presente competencia debemos tener como preferente el fuero del domicilio del reo: y como la testamentaria demandada está radicada ante el Juzgado 5º de lo civil de esta ciudad, y en México domiciliados los albaceas de ella, y aun los herederos varones,

á quienes en la liquidacion hecha, y que hoy se ha devuelto para su correccion y reforma, corresponde la finca perseguida por la municipalidad de Maltrata, pues solamente uno de ellos vive en el Estado de Veracruz; es indudable que en la presente contienda, cualquiera que se considere dueño de la hacienda del Encinal, debe ser declarado competente el ciudadano juez 5º de lo civil Lic. Cristóbal Tello.

Es claro que aunque fueran ya dueños de la hacienda en cuestion los hijos varones del Sr. Pesado, como están tres domiciliados en México, este fuero debe ser el preferente; pero para mayor abundamiento no es posible sostener que la hacienda sea de ellos porque lo es todavía de la testamentaria que no ha concluido, pues la liquidacion no es bastante para trasferir el dominio, y menos cuando como en el caso presente, se ha devuelto para reformarla, por lo que puede decirse que en realidad no está hecha. Además, mientras no se entregan los bienes respectivos á los herederos, y mientras estos no los reciben, la herencia es yacente y entonces representa á la persona del difunto, *hereditas sustinet personam defuncti*, y á su vez solo los albaceas tienen personalidad para contestar las demandas entabladas contra la testamentaria; es así que en el presente caso no se ha hecho entrega de los bienes á los herederos, sino tan solo una liquidacion que no está perfecta puesto que se ha devuelto para su reforma; luego las únicas personas que pueden ser demandadas por la municipalidad de Maltrata, y emplazadas por el Juez de Orizava, son las señoras albaceas. Pero tambien hemos visto que debe demandarse al reo en el lugar de su domicilio; es así que el reo es la testamentaria representada por las señoras albaceas, luego la demanda ha debido intentarse en la ciudad de México que es su domicilio, y el lugar en que dicha testamentaria está radicada.

Sería bastante lo expuesto para sostener victoriosamente la jurisdiccion del Distrito,

puesto que el Juez de Orizava sostiene la suya fundándose tan solamente en que debe ser preferido el fuero del lugar en que está ubicada la cosa; pero hay otras dos razones que no debo callar, y es la primera que aquel Juzgado se habia desistido ya en realidad de la competencia; y la segunda, que pendiente ésta, aquel mismo Juzgado ha innovado.

No se puede negar que la persona moral del Juez de Orizava, es la misma hoy que lo era cuando en 9 de Junio de 1869 la municipalidad de Maltrata demandó á los dueños de la hacienda del Encinal; lo mismo que lo es el actual Juez 5º de lo civil y el Sr. Lic. Montiel que en aquella época desempeñaba el Juzgado. Pues bien, éste desde 3 de Agosto de 1869 inició la competencia al de Orizava, y aquel no solamente no la sostuvo, sino que habiéndose desistido la municipalidad del emplazamiento hecho á los albaceas, el Juzgado la dió por desistida en auto de 14 de Setiembre del mismo año. Pues si son los mismos juzgados y la misma demanda, ¿cómo el Juzgado que admitió el desistimiento puede venir ahora á sostener su competencia como si se tratara de tribunal diferente y de negocio distinto? El Juez de Orizava y el representante de la municipalidad comprendieron que ya no podian competir, y suspendieron todo procedimiento; pero habiendo cambiado por las elecciones respectivas el síndico de la municipalidad, el nuevo, que lo fué el Sr. Trejo, promovió la continuacion del juicio en escrito de 7 de Mayo de 1870. Cuando llegó el nuevo exhorto al Juzgado 5º, el ciudadano Juez actual inició nuevamente la competencia por auto de 20 de Julio siguiente, y aceptada por el de Orizava, se estableció la presente contienda. Pero yo pregunto, ¿ha podido aceptarse la competencia por un Juzgado que estaba ya desistido de ella cuando siguen siendo los mismos juzgados, el mismo juicio, el mismo actor que lo es la municipalidad de Maltrata, la misma accion que es la de posesion y propiedad del rancho de Tlaxomul-

co, y el mismo reo, pues siempre se sigue la demanda contra el dueño de la hacienda del Encinal, ya se persiga como dueño á la testamentaria del Sr. Pesado, ya á sus herederos varones? La contestacion es precisa; el juzgado que ha aceptado el desistimiento no puede venir despues de cerca de dos años á sostener su competencia. Esta es sin duda razon muy poderosa para decidir en favor del C. Juez 5º de lo civil.

He dicho ademas que hay otro motivo para hacerlo así, y es la *innovacion* que pendiente la competencia, se consumó por el Juzgado de Orizava. Hemos visto en efecto que la competencia se inició desde 3 de Agosto de 1869, y sin embargo si se abre el cuaderno principal, se verá de la foja 31 en adelante, que en mediados de 1870 se siguió sustanciando el juicio en Orizava contra D. Samuel Pesado como administrador de la referida hacienda, dándose no solamente autos de puro trámite, sino una sentencia interlocutoria en forma en 28 de Junio del mismo año, no obstante que el Sr. Pesado desconoció constantemente esa jurisdiccion é hizo presente que la hacienda, era de la testamentaria. Hasta que se recibió el nuevo oficio de competencia, mandó aquel juzgado suspender los procedimientos por auto de 27 de Julio; y á pesar de esto volvió á innovar con posterioridad, mandando entregar al actor, por auto de 18 de Noviembre, los documentos originales que habia presentado para apoyar su demanda, y mandando que se agregara la copia.

Por todo esto se vé claramente, que el Juzgado de Orizava ha innovado, no solamente despues de haber recibido el primer oficio de competencia, y aun el segundo, sino todavía despues de haberla aceptado, pues el auto de 18 de Noviembre es posterior á su aceptacion: por lo que ha incurrido en la pena de la ley 8ª título 9º libro 5º de la Recopilacion de Indias, que proviene: *que el Ministro ó Tribunal que atentare, ó innovare, pendiente la competencia, por el mismo caso pierde el derecho*

que pudiera tener al pleito ó negocio de que se tratare, y quede remitido á la jurisdiccion del otro Ministro ó Tribunal con quien compitiere. La ley es terminante, y cualesquiera que sean los argumentos que por algunos abogados respetables se han hecho para atacar su vigencia, por creerla opuesta á la soberanía de los Estados, lo cierto es que no está derogada, que se funda en el principio incontrovertible de que los jueces deben respetar las leyes, y que establece una regla de igualdad para los mismos Estados.

Reasumiendo, tenemos, que es de justicia que se declare competente al C. Juez 5º de lo Civil de la ciudad de México, y que no lo es el de 1ª instancia de la ciudad de Orizava, porque este ha innovado pendiente la competencia, despues de haberla aceptado, y aun despues de que el Juzgado 5º habia remitido á esta Corte su informe; pues requerido para que á su vez remitiera el suyo y los autos, dice sin escrúpulo en oficio de 16 de Noviembre, que se encuentra en el Toca, que esperaba para enviarlos que se agregaran las copias, que como hemos visto, se mandaron agregar y se agregaron por auto de 18 del mismo mes. Debe resolverse tambien como pido, porque el juzgado de Orizava habia consentido en el desistimiento desde su auto de 14 de Setiembre de 1869; de manera que no podia venir un año despues á aceptar una competencia que no habia sostenido. En fin, debe decidirse esto, porque el Juzgado de Orizava sostiene el fuero de la cosa, y el de México el del domicilio, el cual es siempre preferente, de manera que ha debido demandarse en México á los dueños de la hacienda del Encinal. En efecto, si se considera dueños á los herederos varones, estos están domiciliados en México desde que nacieron, y si se considera todavía dueño á la testamentaria, esta está radicada en México, y sus albaceas domiciliados aquí tambien. Por eso es que en México debió demandarse á estos albaceas, y solamente á ellos, porque la hacienda forma aun parte del caudal mor-

tuorio, y no han adquirido su dominio todavía los herederos varones: en primer lugar, porque la simple liquidacion de una testamentaria no la concluye; en segundo lugar, porque la liquidacion hecha no está perfecta pues se devolvió para su correccion y reforma, y no se han expedido ningunos títulos á los herederos varones; y en tercer lugar, porque no se les ha hecho la tradicion de la hacienda sin la cual no pueden adquirir la propiedad, pues como dice con mucha razon mi apreciable compañero el Sr. Dublan en la página 218 del tomo 1º de su nueva edicion del Sala Mexicano, *el único modo derivativo de adquirir el dominio es la tradicion*. Queda, pues, demostrado que el Juzgado de Orizava no es competente para conocer del juicio promovido por la municipalidad de Maltrata contra los dueños de la hacienda del Encinal, pues su dominio pertenece á la testamentaria del Sr. D. José Joaquín Pesado, radicada en México, lugar en que viven y están domiciliados sus albaceas.

Por lo tanto, concluyo suplicando á esta respetable Sala se sirva sentenciar como tengo pedido, con expresa condenacion de costas.

México, Febrero seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Alfredo Chavero.*

APUNTAMIENTOS

para el informe en el acto de la vista de la competencia que debe dirimir la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion entre los jueces 5º de lo Civil de México y Letrado de Orizava.

1º Se pide á nombre del pueblo de Maltrata que se declare que es juez competente para conocer de la demanda interpuesta contra la testamentaria de D. Joaquín Pesado, el juez de 1ª instancia del Distrito de Ori-

zava, tanto por la naturaleza de la accion entablada por el pueblo de Maltrata, cuanto porque atendida la forma de Gobierno porque se rige la República, las leyes de los Estados, por lo que mira á los bienes raíces situados en su territorio, fundan una competencia exclusiva para decidir todas las cuestiones que se refieran á dichos bienes.

2º La presente cuestion debe examinarse, no solo á la luz del derecho civil, sino tambien con relacion á la forma de Gobierno, en virtud de la que los Estados, como soberanos é independientes en su régimen interior, gozan del derecho de legislacion y jurisdiccion, teniendo por esto poder exclusivo para dar leyes sobre los bienes raíces ubicados en su territorio y para conocer y decidir sobre las cuestiones relativas á ellos.

3º Bien sé que el Sr. Peña y otros muchos tratadistas se ocupan en examinar esta cuestion y opinan que el fuero del domicilio es preferente al de la ubicacion de la cosa, y que este no se surta sino cuando el demandado está presente; pero todas estas opiniones se fundan en el supuesto de que haya *unidad de legislacion*, base que falta actualmente á semejante raciocinio como lo demostraré mas adelante.

4º Contra la doctrina que dá la preferencia al fuero del domicilio sobre el de la ubicacion de la cosa, puede presentarse la opinion muy respetable del Carleval (de Juicis título 1º, disposicion 2ª, cuestion 3ª, párrafos 143 y siguientes,) y la de Voet, (Comentarius ad pandectas libro 5º título 1º párrafo 77) los cuales demuestran de una manera concluyente en los lugares citados, que siempre que se trata de una *accion real*, el fuero *ratione rei sitae* es preferente al del domicilio. En nuestro caso, el pueblo de Maltrata ha deducido una *accion real* contra la testamentaria de D. Joaquín Pesado; y por consiguiente, solo autoridades del lugar en que está situada la cosa pueden conocer de esta cuestion por tratarse de aplicar leyes que rigen sobre la cosa misma. De lo contrario, y si por preferir el fuero del domicilio hubiera de ser competente el Juez

5º de lo Civil del Distrito, resultaría que un juez estraño á las cosas de Veracruz, vendría á aplicar las leyes de aquel Estado, ó lo que es peor, que las cosas situadas en el territorio de dicho Estado, podrían ser regidas por leyes dictadas por otra autoridad.

5º Es un principio fundamental de derecho que los bienes raíces situados dentro del territorio de un Estado deben regirse por sus propias leyes con exclusion absoluta de cualquiera otro. Esta es la famosa regla de *Lex loci rei sitae* ó el *estatuto real* de que hablan todos los publicistas. Ahora bien, tratándose en la demanda contra los herederos del Sr. Pesado, de una cosa raíz situada en el territorio de Veracruz, las cuestiones que se susciten sobre esta cosa raíz, no pueden ser resueltas con arreglo á las leyes del Distrito federal, sino exclusivamente conforme á las del Estado de Veracruz; de lo contrario, este no sería soberano é independiente, según la Constitución, toda la vez que cosas ubicadas dentro de su territorio eran regidas por leyes que no emanaban de su Gobierno. No puede concebirse una soberanía que para cuestiones que se refieren á cosas que están dentro de su territorio, tuviera que ocurrir á leyes y autoridades enteramente estrañas á su organización y á su independencia interior.

6º Pero se arguye por los que sostienen la jurisdicción del juez 5º de lo Civil, que si bien Veracruz es libre y soberano en todo lo que mira á su régimen interior, no lo es en sus relaciones exteriores con los otros Estados, de manera, que todas las disposiciones que tiendan á ejercer una fuerza obligatoria mas allá del límite territorial del Estado, no ha tenido facultad para expedirlas, porque esto importaría tanto como obligar á los ciudadanos de otros Estados á sujetarse á las disposiciones del de Veracruz, para lo que indudablemente no ha tenido poder. Esta observación no es en realidad mas que un sofisma. Veracruz no ha querido obligar á los habitantes de otros Estados con sus leyes, porque esto sería absurdo, pero sí ha tenido un perfecto dere-

cho con arreglo á la Constitución, para disponer que cualquiera persona que tenga bienes raíces en su territorio habrá de sujetarse únicamente á las leyes y autoridades del Estado. La regla de derecho comun adoptada en este punto por todas las Naciones, es que las *acciones reales* tienen que someterse á la *Lex rei sitae*, así como las personales se sujetan á la ley del domicilio del demandado. Esta regla está fundada en la doctrina de Story (*conflict of laws* párrafos 551, 555) de Wheaton, (*Elem dret inter*, partida 2º capítulo 2º párrafos 3 y 16,) de Calvo, (*Derecho internacional teórico y práctico* tomo 1º capítulo 5º) y de otros muchos publicistas que no considero necesario citar.

Si esta es la regla general, no cabe duda que Veracruz ha estado en su derecho en ejercicio de su soberanía para disponer que sus leyes y autoridades conozcan exclusivamente de las cuestiones relativas á los bienes raíces que estén en su territorio. Dejaría de ser soberano por el solo hecho de que las autoridades ó leyes del Distrito federal ó de otro Estado vinieran á determinar sobre bienes raíces situados dentro de su territorio. Y de aquí no se sigue el inconveniente de que de este modo quedaran obligados los habitantes de otro Estado, pues el Código veracruzano solo habla de las cosas sin relación alguna á las personas, de manera, que todo hombre que llegue á adquirir bienes en Veracruz tiene que saberlo mismo que el que adquiere en España ó en los Estados Unidos, que todas las cuestiones relativas á la *cosa raíz*, deben ser resueltas en el lugar donde está situada y no en donde accidentalmente asista su dueño.

7º Pretender que el fuero del domicilio sea preferente al de la ubicación de la cosa, equivale á desconocer el derecho que los Estados tienen para su régimen interior; y si generalmente pudiera ocurrir alguna duda, desaparece del todo tratándose de la *Lex loci rei sitae*, pues que sobre este punto es inconcuso que los Estados tienen el mas perfecto derecho de legislación y jurisdicción.

Sostener que el pueblo de Maltrata debe venir á demandar á los herederos al lugar de su domicilio, es lo mismo que obligar á los habitantes de Veracruz á que en sus cuestiones por cosas raíces ubicadas en aquel Estado se sometan á las leyes y autoridades del Distrito federal. Y esto importaría que autoridades extrañas, como son las del Distrito, vinieran á ejercer jurisdicción sobre ciudadanos y cosas del Estado de Veracruz. Esta consecuencia denota, que negar la jurisdicción al Juez de Orizava en el presente caso, es desconocer la naturaleza del sistema federal por el que se rige la República.

8º Los fundamentos del Juez 5º de lo Civil y del Sr. Fiscal se apoyan en doctrinas y en una jurisprudencia que supone la *unidad de legislación*. Entonces sí se comprende que el fuero del domicilio sea preferente al de la ubicación de la cosa. Pero tratándose de entidades independientes con derecho de legislar según se demuestra con el artículo 117 de la Constitución de la República, que reserva á los Estados la facultad de hacer todo lo que la Constitución no les limita, es fuera de duda que semejantes doctrinas no pueden ya tener aplicación. Atendida la forma de Gobierno, esta respetable Sala tiene que resolver la competencia de jurisdicción que se presenta, no por las reglas y doctrinas que suponen la *unidad de legislación*, sino por los principios fundamentables de derecho, á fin de poder determinar si los habitantes y las cosas de Veracruz han de ser sometidas á las leyes y autoridades del Distrito federal; ó si un vecino de este que tiene bienes raíces en aquel Estado debe contestar respecto de estos bienes ante las autoridades donde están situados. Se trata de dos fueros que alegan, no dos individuos particulares bajo una misma legislación, sino dos entidades independientes en su régimen interior, de las que ninguna de las dos puede permitir que leyes y autoridades extrañas vengán á resolver sobre cuestiones que miran á ese mismo régimen interior. No hay, pues, que atenerse á

las doctrinas que suponen la unidad de legislación, sino á la regla fundamental de la jurisprudencia, de que las acciones reales tienen que someterse á las leyes y autoridades del lugar en que está situada la cosa.

9º Resulta de estos breves apuntamientos, que tanto por derecho civil según la autorizada opinión de Carleval, Voet y otros lugares citados, como por los principios generales de derecho que deben aplicarse tratándose de entidades independientes en su régimen interior, con derecho de legislación y jurisdicción como lo son nuestros Estados debe ser competente para conocer de un punto en que se ventile una *acción real*, el juez del lugar en que esté situada la cosa. En esta virtud, es de esperarse que esta respetable Sala se ha de servir declarar la competencia en favor del Juez de Orizava por tratarse de un juicio en que se ha decidido una acción real pidiendo la restitución de una cosa situada en el territorio de Veracruz.

México, Febrero tres de mil ochocientos setenta y uno.—*M. Dublan.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero siete de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia de jurisdicción promovida por el Juez 5º de lo civil de esta ciudad, al de 1ª instancia de Orizava, para conocer del juicio promovido por la municipalidad de Maltrata, contra los herederos de D. José Joaquín Pesado sobre propiedad de un terreno de la hacienda del Encinal; lo alegado por las partes en apoyo de la jurisdicción respectiva; lo expuesto é informado sobre el mismo objeto por los jueces competidores; lo pedido por el ciudadano Fiscal, y los apuntamientos del ciudadano Lic. Manuel Dublan, apoderado de la Municipalidad; oído lo alegado al tiempo de la vista por el ciudadano Lic. Alfredo Chavero á nombre de la testamentaria D. José de

Joaquín Pesado, y en atención á todo lo demas que consta en autos y se tuvo presente. Considerando: que la testamentaria de D. José Joaquín Pesado está radicada en esta ciudad y domiciliados en ella los albaceas de la misma, antes de que se promoviera esta competencia; que es regla general que el actor debe de seguir el fuero del reo, lo cual manda la ley 32, tít. 2º, Part. 3ª, que con arreglo á lo dispuesto en la ley 4ª, tít. 3º de la misma partida, el actor debe demandar al reo en el lugar de su domicilio, por lo cual los autores enseñan que el fuero del domicilio es el principal, como se vé en la fracción 11ª de la Práctica Forense de Peña y Peña núm. 151; que con arreglo á la ley de 23 de Mayo de 1851, en la decision de las competencias se debe estar á las reglas de la legislacion comun, que rigió como general antes de la adopcion del sistema federal, con las reformas que en ellas hayan introducido la Constitucion federal y las leyes del Congreso de la Union, cuya legislacion no ha variado en el punto de que se trata, ni la actual carta política de la República, ni las leyes del Congreso general; que ademas, segun los artículos 462 y 491 del Código especial de procedimientos de Veracruz, las cuestiones de competencia entre las autoridades del Estado, y las de otro, deberán seguirse conforme á las leyes generales; por lo expuesto, de conformidad con lo pedido por el ciudadano Fiscal y con fundamento de lo que previene el art. 99 de la Constitucion federal, se declara: que el Juez 5º de lo civil de esta ciudad es competente para conocer de la demanda puesta por la Municipalidad de Maltrata contra la testamentaria de D. José Joaquín Pesado.

No hay condenacion de costas.

Devuélvanse las actuaciones al Juez 5º de lo civil de esta capital, con copia de esta sentencia, remitiéndose igual copia al Juez de Orizava para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el toca. Así lo mandaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que

formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido por el C. Brígido Mora ante el juzgado de Distrito de Michoacan, contra el Presidente del Ayuntamiento de Los Reyes por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR.

C. Juez de Distrito.

Segun el artículo 101 de la Constitucion general y la ley Orgánica de 20 de Enero de 869, solo es competente la autoridad federal para conocer de los recursos de amparo, previniéndose muy expresamente en el artículo 3º de la ley citada, que en esta clase de juicios se radica la 1ª instancia en el Juzgado de Distrito de la demarcacion en que se ejecute ó trate de ejecutarse la ley ó acto que motive el recurso de amparo. Sobre punto tan interesante y para mayor convencimiento de lo expuesto, puede verse el proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso General y se registra en el número 314 del "Diario Oficial" correspondiente á Noviembre de 868, así como el dictámen de la comision respectiva en el número 327 del citado Diario, relativo al mismo mes y año.

Esto supuesto, el Juez de 1ª instancia de Los Reyes no debió haber dictado una providencia que no estaba en sus facultades, pero aun en el caso de que hubiera procedido con derecho, la suspension decretada